

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
Medellín, veintiuno (21) de febrero de dos mil veintitrés (2023)**

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 del Decreto 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por JUANA NATIVIDAD TABARES DE ROJAS en contra de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., siendo vinculada por pasiva SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. (Radicado 05001-31-05-011-2019-00146-01).

ANTECEDENTES

Pretende la demandante el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de su hija María Eugenia Rojas Tabares a partir del 25 de febrero de 2018, con los correspondientes intereses de mora que contempla el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales.

Como fundamento a sus pretensiones narró que el 25 de febrero de 2018 falleció su hija María Eugenia Rojas Tabares. Explica que para esa época vivía con sus dos hijas de quienes derivaba su sustento porque no trabaja ni recibe pensión. Efectuó reclamación de la pensión de sobrevivientes en febrero de 2018 ante Seguros de Vida Alfa S.A, la que emitió respuesta negativa por no encontrar acreditada la dependencia económica al estar afiliada al sistema de

05001-31-05-011-2019-00146-01

salud como beneficiaria por medio de otra de sus hijas y contar con un bien inmueble de su propiedad.

PORVENIR S.A. dio respuesta al libelo con oposición de lo pedido. Aceptó la calidad de madre de la demandante, pero afirma no constarle la dependencia económica alegada, con la precisión de haberse efectuado la reclamación del derecho ante Seguros de Vida Alfa S.A. y no ante el fondo. Como medios de oposición propuso las excepciones de mérito que denominó: falta de integración de la litis por pasiva, falta de causa para pedir, inexistencia de la obligación, prescripción y buena fe.

Mediante auto del 11 de febrero de 2021 el Juzgado de conocimiento dispuso vincular al trámite a SEGUROS DE VIDA ALFA S.A en calidad de litisconsorte necesario por pasiva, y efectuada su notificación se pronunció aceptando el vínculo de madre e hija, pero negando la dependencia económica, advirtiendo que ello no se desprende de la calidad de beneficiaria en salud de la demandante por medio de un tercero y de la titularidad de un bien inmueble que reposa registrado a su nombre, aduciendo que lo que puede desprenderse es que era la hija quien dependía de su madre y no al revés. Como medios de defensa formuló las excepciones de fondo de falta de causa para pedir, pago, compensación y prescripción.

El 21 de enero de 2022 el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia en la que CONDENÓ a SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. a reconocer y pagar a la actora la pensión de sobrevivientes a partir del 25 de febrero de 2018. CONDENÓ a pagar la suma de \$43.737.695 por concepto de retroactivo pensional calculado entre el 25 de febrero de 2018 y el 31 de enero de 2022 con la autorización del descuento de los aportes en salud, ordenando que a partir del 01 de febrero de 2022 debiera reconocerse una mesada pensional equivalente a \$1.000.000 sobre 13 mesadas anuales. CONDENÓ a reconocer intereses moratorios a partir del 30 de abril de 2018 hasta cuando se presente el pago efectivo. CONDENÓ en costas a Seguros de Vida Alfa S.A, fijando las agencias en derecho en la suma de \$4.000.000.

05001-31-05-011-2019-00146-01

La sociedad condenada se apartó de la decisión, indicando que a su juicio no quedó debidamente acreditada la dependencia económica con relación a la hija fallecida, en tanto no se pudo constatar que al momento de la muerte fuera persistente y permanente ni que la entidad de la ayuda fuera significativa para la vida de la beneficiaria, entendiendo que en el asunto la prestada por la pensionada fue en calidad de mera colaboración porque los testigos dieron cuenta que la fallecida no ganaba más de un salario mínimo y según las reglas de la experiencia no pudiera aportar en esa medida a su núcleo familiar y específicamente a su madre una ayuda importante, incluso, era la testigo quien aportaba en mayor medida para los gastos por contar con posibilidades superiores, además que luego de la muerte, las condiciones del hogar continuaron igual, lo que quiere decir que con la ausencia de la hija, no se menguaron las condiciones de la madre, quien recibía ayuda de sus hijos pero sobre todo de Rosa y Jaime. Se aparta entonces del análisis probatorio por demostrarse un aporte mínimo de parte de la pensionada fallecida que la incita a solicitar la revocatoria de la decisión.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

No es tema de discusión al interior del plenario que María Eugenia Rojas Tabares en su calidad de pensionada por invalidez a partir del 08 de enero de 2015 (Págs. 75-76 Archivo 02 Primera Instancia) falleció el 25 de febrero de 2018 (Pág. 9 Archivo 02 Primera Instancia), cuyo vínculo con la demandante es el de hija y madre (Pág. 7 Archivo 02 Primera Instancia).

De cara a lo anterior, y atendiendo la argumentación de la recurrente, el problema jurídico a resolver por esta Sala de Decisión se circunscribe a establecer, si la demandante acreditó en debida forma el requisito de ley de dependencia económica que la haga beneficiaria de la pensión de sobrevivientes perseguida en razón al óbito de su hija María Eugenia Rojas Tabares acaecido el 25 de febrero de 2018.

05001-31-05-011-2019-00146-01

Pues bien, para resolver el asunto se tiene que la normatividad aplicable acorde a la teoría del hecho causante es la vigente al momento en que acaeció la contingencia asegurada, por lo que al haber ocurrido el deceso de la pensionada el 25 de febrero de 2018, debe aplicarse lo que dispone el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para definir el derecho a la pensión de sobrevivientes deprecada, que señala los beneficiarios de la prestación, indicando textualmente y en lo que nos compete lo siguiente de cara al tema:

“... d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este.”

Así, la actora como madre de la fallecida, calidad indiscutida y corroborada con el Registro Civil de nacimiento arribado, necesariamente debe demostrar una dependencia económica respecto de la causante y probar la imposibilidad de auto sostenimiento, es decir que, sin el aporte de la difunta no podía ni podría procurarse una vida digna (Ver SL1604-2022). Al respecto, en voces de la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, la colaboración regular y simple no es suficiente para predicar la aludida dependencia, ya que la ayuda debe tener una connotación relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento de los padres, y en el mismo sentido, se ha señalado que ese concepto legal de dependencia supera la simple subsistencia, pues se trata de garantizar unas condiciones dignas de vida (Ver SL1804-2018, SL4217-2018 y SL1386-2022), de modo que, la mera presencia de un auxilio o ayuda monetaria del “*buen hijo*” no siempre es indicativo de una verdadera dependencia económica y, en esta eventualidad, no se cumplirían las previsiones señaladas en la ley.

A más de ello, la Alta Corporación en nuestra especialidad ha establecido los siguientes parámetros para determinar la dependencia económica: i) Debe ser cierta y no presunta, ii) La participación debe ser regular y periódica y iii) Las contribuciones deben ser significativas respecto del total de ingresos del beneficiario (Ver además de la SL1704-2021 enunciada en la providencia consultada, la SL5605-2019, SL5648-2021 y SL4031-2022).

05001-31-05-011-2019-00146-01

En tal contexto, debe brotar del acervo probatorio estando excluida la posibilidad de contar la causante con cónyuge, compañero permanente o hijos, la dependencia económica de su madre Juana Natividad Tabares de Rojas rituada en el marco de las condiciones y elementos fijados por la jurisprudencia.

Para ese fin, la promotora de la acción judicial trajo como declarantes a JAIME DAVID ROJAS TABARES y BENIGNA ROSA ROJAS TABARES, hijos de la demandante, los que explicaron que María Eugenia Rojas ante la ausencia de pareja e hijos siempre estuvo muy dedicada al hogar y a su madre, derivando primero de su fuente de trabajo y luego de su pensión por invalidez ingresos que entregaba para los gastos del hogar, compuesto por su madre Juana Natividad, su hermana Benigna Rosa y luego, también por Jaime David, y que por no superar en mucho el salario mínimo eran destinados al pago del impuesto predial y en oportunidades colaboraba con el mercado y gastos adicionales de la madre relacionados con su EPS y vestido. Indicaron que Benigna Rosa tenía ingresos superiores porque era pensionada y además hacía manualidades y se dedicaba a la confección que le generaba entradas adicionales y que le iba muy bien, pero que eso cambió en el año posterior a la muerte de su hermana, por ser diagnosticada con una artrosis que le impidió seguir ejerciendo en la modistería, advirtiendo que desde el fallecimiento la situación económica ha desmejorado porque ya no son dos personas aportando sino una, en la medida que actualmente el hermano Jaime David se encuentra desempleado aunque para la fecha del deceso laboraba en Servientrega devengando aproximadamente \$1.600.000 y todos los hermanos de acuerdo a sus posibilidades daban su colaboración. Aclararon que la vivienda donde residen es propia y se encuentra a nombre de Juana Natividad y María Eugenia, porque en principio se compró otro inmueble a nombre de los progenitores y en vida del padre pasó el 50% a María Eugenia sin haber sido posible por tema de dinero realizar la sucesión correspondiente luego de su deceso.

De esta probanza testimonial es dable establecer las condiciones precisas del núcleo familiar de la demandante y permite asentar que frente a su hija

05001-31-05-011-2019-00146-01

fallecida, contrario a lo que concluyó el *a quo*, no existía una subordinación económica.

A esa conclusión se arriba toda vez que lo que revela el conjunto demostrativo es que aun cuando María Eugenia dentro de sus posibilidades brindaba una ayuda económica al hogar donde residía con su madre y hermana, ella se limita casi que concretamente al pago del impuesto predial, quedando despejado para esta colegiatura que de donde emergía el cubrimiento de los restantes gastos era de Benigna Rosa, quien por demás es quien desde el inicio de su vida laboral responde por la afiliación en salud de su madre, y desde el año 2002 declaró su subordinación total en cuanto a sus gastos de sostenimiento y alimentación (Archivo Oficios - Dependencia Económica).

De ese modo, habiendo quedado demostrado el suministro de unos recursos de parte de la causante y que ello ocurría de manera regular y constante, entendida su frecuencia en cuanto a su colaboración fija como trimestral, no se denota que se trate de una contribución significativa, porque aunque no existen medidas absolutas y definitivas para examinar el presupuesto de dependencia (Ver SL1931-2021), de lo acreditado pudiera decirse que la causante cubría el gasto de vivienda en el contexto que la titularidad del inmueble proviene de su padre, porque sobre la alimentación y el vestido no se tuvo la posibilidad probatoria de establecer el tipo de aporte ofrecido que permita calificarlo como determinante lo que de paso complica determinar el grado de sometimiento económico y la magnitud de la ayuda monetaria (ver SL2490-2019), no siendo dable pregonar que el nivel de vida digna y decorosa de su madre estuviera subordinada a su capital, porque aunque es patente y pacífico que la sujeción o dependencia no se exige que sea total y absoluta de su descendiente, y no es el monto de dinero aportado el que prevalece (Ver SL4246-2022), si debe darse un suministro valioso para la satisfacción de necesidades básicas y elementales.

Y es que en efecto, existe una falta de autosuficiencia económica de la demandante, pero lo que se vislumbra es que la sujeción de Juana Natividad ha provenido en los términos de la jurisprudencia es de Benigna Rosa, de

quien pudiera anunciarse era la principal proveedora de lo esencial para permitir la congrua subsistencia no solo de su madre sino incluso de María Eugenia y luego, de Jaime David desde cuando quedó desempleado, porque a pesar de que en la actualidad puede evidenciarse que las condiciones de tipo económico han variado dentro de este ámbito de familia con presencia de dificultad, ello ha obedecido no propiamente a la ausencia del ingreso de María Eugenia que haya imposibilitado sobrellevar las cargas y los gastos, sino a que Benigna Rosa cesó su actividad productiva independiente luego de transcurrido un año desde la muerte de su hermana, viendo reducidos los estipendios por cuestiones de salud que al mismo tiempo interfirieron en las condiciones de su madre, lo que quiere decir que la contribución brindada por la pensionada no se constituía en un verdadero soporte ni era proporcionalmente representativa ni indispensable en función de la intervención de Benigna Rosa, por lo que siendo la participación económica de esta hija muy superior al aporte de la causante, no es dable hablar de dependencia sino de una colaboración sumida en las obligaciones del “*buen hijo*”, derivada por demás en la circunstancia de ser el lugar de su residencia.

En ese orden, como quiera que no se halló evidencia suficiente de la dependencia económica, ni del cambio de la situación financiera de la madre por cuenta del deceso que ameritara disponer la preservación de la ayuda a través de la concesión del derecho reclamado, es que se hace necesario promover la revocatoria de la decisión, para en su lugar disponer la absolución de las pretensiones a la aseguradora demandada.

En esta sede no se causaron costas por las resultas del recurso. Las de primera instancia estarán a cargo de la demandante.

DECISIÓN:


En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **REVOCA** la sentencia apelada, de fecha y procedencia indicadas en la que se ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de

05001-31-05-011-2019-00146-01

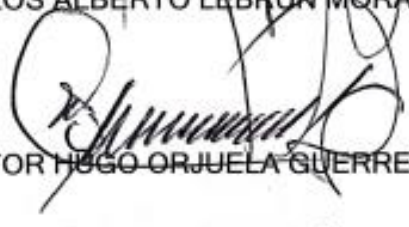
sobrevivientes para en su lugar, **ABSOLVER** a Seguros de Vida Alfa S.A. de las pretensiones de la demanda. Las costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (num.3°, lit. d., art. 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en concordancia con el auto 550-2021 CSJ).


Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

05001-31-05-011-2019-00146-01

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación: 05001310501120190014601
Proceso: ORDINARIO LABORAL
Demandante: JUANA NATIVIDAD TABARES DE ROJAS
Demandado: A.F.P. PORVENIR S.A.
M. P. CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo: 21/02/2023
Decisión: REVOCA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 22/02/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS

Secretario